

Premio a la Tolerancia

A los policías y guardias civiles que defendieron el orden constitucional frente al Proceso

Barcelona, 20 de octubre de 2023

Este premio es un reconocimiento a los policías y guardias civiles que, en las horas más oscuras de la noche separatista, aseguraron la ley y la libertad españolas. Es decir, este es un recordatorio de que la verdad existe. De que los hechos de octubre de 2017 tuvieron lugar. De que los delitos se cometieron. De que hubo culpables: los golpistas, los malversadores, los sediciosos, los prófugos. De que los policías y los guardias civiles cumplieron con su obligación al impedir el referéndum ilegal. Y los jueces al juzgar a sus responsables. Y el Rey al reprobarlos, en aquel discurso para el consuelo y para la Historia. Es decir, de que España no tiene motivo alguno para pedir perdón.

Es un honor tomar la palabra en este acto. La Asociación por la Tolerancia es una de las más decentes e imprescindibles organizaciones civiles españolas. Pocas representan como ella la resistencia de la Cataluña no nacionalista. Su humildad. Su paciencia. Su perseverancia. Su pacifismo esencial. Cualquiera se sentiría profundamente honrado de intervenir en su nombre. Y mucho más de recibir el premio que lo lleva.

Y, sin embargo, ya lo ven: ningún policía o guardia civil va subirse hoy a este escenario. No les han dejado. ¿Quiénes? Sus jefes políticos. Aquel juez al que creíamos valiente y al que el sanchismo —o sus propias flaquezas— han convertido en un ministro sombrío y servil.

Aunque en realidad se comprende.

Los golpistas premiados y los policías sin premio: ese es el perverso balance de este Gobierno. Y su proyecto.

Sí, este Premio a la Tolerancia deja involuntariamente en evidencia al Gobierno. Concretamente, a la maniobra con la que un oportunista sin escrúpulos busca perpetuarse en el poder después de perder las elecciones. El señor Sánchez, tan beligerante respecto a la necesidad de mantener viva y divisiva la memoria de la Guerra Civil, pretende borrar lo sucedido hace cuatro años en Cataluña. Peor, pretende someter los hechos a un mágico centrifugado moral, por el cual las culpas se invertirían. Los sediciosos se convertirían en demócratas y los demócratas... Pues en lo que digan los sediciosos. En fachas, claro.

La amnistía no perdona el delito. Eso lo hace el indulto. La amnistía borra el delito. Es decir, blanquea la sedición y a los sediciosos. Con la amnistía, el Gobierno da la razón a los golpistas y se la quita a quienes defendieron y aplicaron la vigente ley española. Con la amnistía —y esto es clave— se funda una nueva legalidad, la de la autodeterminación, que quedaría retroactivamente bendecida, legitimidad, y

por tanto autorizada para volver a ejercerse desde ya. Por resumir, se legaliza el golpe de Estado.

Los nacionalistas lo han entendido bien. El señor Aragonès, ayer en el Senado: «La amnistía es el punto de partida para un nuevo referéndum». Claro, porque valida el referéndum anterior. Si el propio Estado reconoce que votar la independencia no es un delito, pues *ho tornarem a fer!* La lógica es aplastante. Aplasta la Constitución.

Sí, queridos amigos, con la amnistía el que pide perdón, y de rodillas, es el Estado. Es decir, entre otros, los policías y guardias civiles a los que hoy premiamos. O intentamos premiar.

Los golpistas premiados y los policías sin premio: ese es el perverso balance de este Gobierno. Y su proyecto.

Este acto es, por tanto, una afirmación de la verdad, una reivindicación del Derecho español y una advertencia tajante: no, no vamos a pedir perdón. Porque la autodeterminación no fue legítima entonces ni lo será nunca mientras rija el orden constitucional. La autodeterminación es incompatible con la democracia. La liquida.

Volvamos a los hechos. A lo que vimos y vivimos. A fin de cuentas la verdad está trenzada de vivencias personales.

Yo estuve la mañana del 1 de octubre en Sant Julià de Ramis. Lo he contado muchas veces y, por lo que se ve, tendré que seguir haciéndolo.

Yo vi cómo una horda ciega de xenofobia convertía un anodino polideportivo de pueblo en el escenario de un golpe de Estado. Vi cómo, a golpe de falsas urnas chinas, unos catalanes se disponían a violentar la Constitución y su propio Estatuto para convertir a otros catalanes en extranjeros. Vi cómo blindaban el recinto con groseras cadenas y un ridículo tractor. Cómo clamaban consignas parvularias, henchidas de odio y de ignorancia. Y vi, sí, cómo utilizaban a niños de cuatro y cinco años como escudos humanos ante la inminente comparecencia del Estado. Y el Estado compareció.

La Guardia Civil llegó con la primera luz del día. En una operación seca y rápida, desarticuló el golpe. Con una delicadeza extrema —felizmente desproporcionada—, dos agentes retiraron a los niños y los pusieron a resguardo de sus padres. Los separatistas los provocaban, les escupían y les gritaban a dos centímetros de la cara: «iVisca Terra Lliure!». Es decir, vivan el tiro en la rodilla y la bomba en el pecho. Pero los guardias civiles, impávidos como la ley, haciéndose acreedores de este premio, siguieron a lo suyo: la restauración de la paz civil. Aquella mañana del 1 de octubre de 2017 la Guardia Civil fue, como nunca, la

garante de la convivencia española. Una fuerza de pacificación.

Por un instante, sólo por un instante, imaginen qué hubiera sucedido sin su intervención.

Dos años después, tarda ya en la noche, bajando el Paseo de Gracia hacia la vía Layetana, vi a la Policía Nacional desempeñar la misma y conmovedora función. Vi cómo energúmenos levantaban barricadas, lanzaban piedras y amenazaban con reducir la ciudad a cenizas en venganza contra la sentencia que condenaba a los golpistas por sedición. Y vi cómo los policías les respondían. Moral y materialmente maniatados. Contenidos. A uno de ellos, Iván Álvarez, casi lo matan. A Álvaro González, que hoy nos acompaña, también.

A Iván lo visité dos días más tarde en el hospital. Estaba tumbado en una camilla, los pulmones encharcados, el cráneo partido, los ojos llenos de lágrimas. Hablaba muy bajo, entre espasmos, y lo cogí de la mano. Le pregunté qué podía hacer por él y me contestó: «Reconocimiento para mis compañeros». No lo olvidaré jamás.

He visto otras cosas. Y ustedes también.

Hemos visto a españoles decentes, de distintas ideologías, manifestarse juntos en Barcelona en defensa de la libertad, la igualdad y la soberanía común.

Hemos visto al Rey poner fin al desamparo institucional de los catalanes no nacionalistas y asumir con ellos un compromiso inédito y profundamente emocionante: «No estáis solos, ni lo estaréis; teneís todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de vuestra libertad y de vuestros derechos».

Y hemos visto también, yo desde un balcón de la Plaza de las Salesas de Madrid, desfilar al alba los furgones policiales hacia el Tribunal Supremo, donde los golpistas fueron juzgados con todas las de la Ley. Y más. Con cámaras grabando y difundiendo cada palabra y cada gesto, no ya de los acusados, sino de la acusación y de los jueces. La televisión: ese tribunal de garantías mediático con proyección internacional.

Y al final vimos, sí, cómo los golpistas no eran condenados por rebelión sino por sedición, apelando a no sé qué ensoñación, para asegurar una sentencia unánime. A mí aquella concesión no me gustó, lo admito. Pero la acepté. Y con el tiempo llegué a celebrarla. España, me dije, no sólo es un Estado de Derecho. Es también un Estado benévolo, generoso, integrador.

Todo esto ocurrió. Y nada de esto puede ser borrado ni mucho menos tergiversado porque así lo exijan las ambiciones de un oportunista sin escrúpulos.

El premio que entregamos esta noche es un premio a la dignidad de un Estado que no tiene motivos para pedir perdón. Si acaso, para exigirlo.

Me dirán que el Estado lleva décadas pidiendo perdón. Replegándose cabizbajo, avergonzado, como si arrastrara una inaudita culpa heredada de la que no se logra desprender. Ciertamente. Es uno de los misterios de la democracia española: enterró la dictadura pero asumió sus deudas.

Bien lo saben muchos policías y guardias civiles. Ambos cuerpos tienen un largo historial de agravios. Estos sí, reales y legítimos. Han sufrido humillaciones insoportables. Y no me refiero a los años de plomo, ese socavón abisal. Me refiero al propio Proceso. Aquellos barcos de caricatura infamante. Aquella inaudita falta de medios. Y sobre todo la precipitación y la cobardía con las que tantas bellas almas se sumaron al coro de TV3 y La Sexta: «¡Porras contra viejecitas, violencia ilegítima, desproporción!»

Si una aberración como la amnistía se acaba aprobando, si hay tantos socialistas dispuestos a desdecirse y tantos presuntos juristas y periodistas haciendo contorsiones para justificarla, es porque la vergüenza española es un terreno

abonado. Abonado, también, por el espíritu de la época. El desprecio por las jerarquías, la aversión a todo lo que huelga a autoridad, el prestigio de los sentimientos, la entronización de la voluntad... «Los tribunales no pueden juzgar sentimientos», dijo el señor Montilla, un contemporáneo de manual.

Ahora bien, dicho todo esto, asumidas las responsabilidades colectivas y el contexto, nada puede justificar la legalización del golpe de Estado. Y mucho menos la torna.

La torna, sí. Como el título de la obra maestra de Els Joglars, que en plena Transición le valió a Albert Boadella el éxito y la cárcel. La torna es esa porción, ese complemento, que se añade a una medida para que dé un peso neto.

Entonces la torna fue un criminal accidental, por así decirlo, que se hacía llamar Heinz Chez, al que el franquismo agonizante ejecutó junto al anarquista Salvador Puig Antich. A modo de atenuante. Para disimular.

Ahora la torna son los policías procesados por su actuación el 1 de Octubre de 2017, a los que el partido Sumar, esa resta, propone amnistiar junto a Puigdemont y los CDR. Para redondear la amnistía. Para que dé el peso. Para que el Gobierno pueda decir: «Miren, miren, no sólo blanqueamos a los de un bando; también a los del otro». Y que los demócratas les demos, rendidos, las gracias.

Lo que faltaba.

También la tolerancia tiene sus límites.

Queridos amigos,

El Estado no debe pedir perdón a quienes lo atacan. Pero, además, es hora de que empiece a defender a quienes lo defienden. Al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, por supuesto. Merecen salarios dignos y como mínimo equivalentes a los de las policías autonómicas. Y también defensa frente a los hoy socios del Gobierno. Pienso en Bildu y su sucia campaña para echar a la Guardia Civil del País Vasco y Navarra. Al menos ahora no lo hacen reventando cuarteles llenos de niños, pero el efecto es el mismo.

Un Estado sin Fuerzas y Cuerpos de Seguridad presentes en todo el territorio nacional no es un Estado. Es una entelequia.

El Estado también tiene que defender a sus jueces y fiscales. Sobre todo a los que sirven en Cataluña y el País Vasco. Cada vez más plazas quedan vacantes. ¿Alguien se ha preguntado por qué? Pero sobre todo, ¿cómo y cuándo vamos a remediarlo? Hacer Estado es hacer Justicia. Es decir, proteger a los débiles de los poderosos. A la niña de Canet de la Generalidad que incumple la ley.

Es una de las muchas paradojas de la izquierda española: ¿defensora del Estado? No hace más que socavarlo.

Finalmente, el Estado tiene que apoyar, y dar las gracias, y levantar un monumento, a quienes como la Asociación por la Tolerancia llevan más de cuarenta años haciendo un trabajo que no les corresponde. Sin ir más lejos, esta misma noche.

El Estado existe precisamente para que los ciudadanos no tengan que asumir el papel de héroes. Para que nadie se vea moralmente impelido a montar una asociación para defender los derechos civiles de sus vecinos. Ni a recaudar dinero para asegurar el cumplimiento de las sentencias judiciales, como la del 25% del español en las aulas. Ni a convocar pequeños actos, un viernes de otoño por la noche, para rendir tributo a quienes tuvieron que emplear la fuerza que legítimamente tenían encomendada para asegurar nuestra libertad.

Todo eso es tarea del Estado. Y lo será.

Vengo esta noche, por tanto, también con un mensaje de esperanza.

Nada de lo que hemos visto y estamos viviendo es inevitable. Ni la impunidad de los golpistas. Ni su envalentonamiento. Ni la decadencia de Cataluña. Ni por supuesto la ruptura de España.

El sanchismo —voy a insistir— es ante todo una forma de pesimismo. El PSOE y sus socios abonan la vieja teoría de que España está condenada a repetir sus fracasos históricos. De que España sólo puede ser aquello que auguran los cenizos y sus odiadores: un duelo a garrotazos, un Frankenstein descosido, un desencanto. De que la etapa constitucional no ha sido más que un paréntesis, fuegos artificiales que brillan efímeramente para disolverse en la noche.

Y no es verdad.

España tiene un presente difícil, pero su futuro depende de nosotros. De nuestras convicciones, de nuestro coraje y de nuestra determinación. Los líderes políticos son imprescindibles, desde luego. Pero también lo son los ciudadanos, responsables últimos del destino de su nación.

Españoles,

La Constitución de 1978 sigue teniendo vigencia y valor. Un profundo valor político y moral. La Constitución se levantó sobre una idea luminosa: la idea de que el valor de un ser humano no depende de ninguno de sus atributos identitarios —el sexo, la raza, la procedencia, el acento o el color de piel—, sino sólo de sus hechos.

«Sábeta Sancho, que no es un hombre más que otro sino hace más que otro», dijo sabiamente el Quijote.

Sobre esa idea se funda la nación moderna, la nación de ciudadanos libres e iguales que desde 1978 es España. Por esa idea entregaron su vida los mejores de los nuestros. Y por esa idea dieron la cara y se jugaron el cuerpo los policías y guardias civiles a los que hoy rendimos homenaje.

Nadie va a subirse a este modesto escenario para recibir el vigésimo noveno Premio a la Tolerancia. Pero el día llegará. Y entonces no seremos 100 personas en una pequeña sala alquilada de un hotel, sino miles de ciudadanos bajo el amparo de unas autoridades políticas dignas de nuestro respeto.

España no tiene motivos para pedir perdón.

Ni nosotros el derecho a desistir.

Muchas gracias.